

URGE UNA NUEVA ASAMBLEA PARA SUPERAR LA CRISIS
Tal Cual, lunes 23 de Agosto 2010

Econ. Isaac Mencía

Venezuela actualmente es el país con el peor desempeño económico y con el ambiente político más hostil a los derechos de propiedad y libertad en América Latina, con excepción de la martirizada Cuba comunista. El país lidera la región en caída del PIB, alta y persistente inflación, derrumbe de la inversión, y desconfianza reflejada en el riesgo- país más elevado de todo el continente. Estos resultados se presentan pese a haber sido Venezuela el país que más se benefició en el período 2003-2008 por los altos precios de las materias primas, dada su condición de país exportador de petróleo.

Simultáneamente, la gestión del gobierno en áreas como seguridad personal y de bienes, infraestructura, salud, educación, protección del ambiente, construcción de vivienda, justicia, manejo honesto de los recursos públicos, y promoción de un clima de paz y armonía social, es deplorable por su ineficiencia e ineficacia potenciando los efectos negativos que la crisis económica tiene en el bienestar de la población, particularmente en los más pobres.

Se trata pues de una crisis tanto en el funcionamiento y desempeño de la economía como del Estado y sus instituciones, retroalimentándose mutuamente. En ambos ámbitos el proyecto político que impulsa el Presidente Chávez exhibe un rotundo fracaso, siendo responsable del mismo no sólo el Poder Ejecutivo sino también el resto de los poderes públicos. Entre éstos destaca la Asamblea Nacional por el impacto que tiene sus decisiones en la economía y en la gestión del gobierno.

La Asamblea, controlada mayoritariamente por el oficialismo, ha sido un instrumento fundamental para la ejecución del proyecto político de inspiración totalitaria que ejecuta el gobierno. Ha apoyado militantemente tres de las políticas que más daño han hecho a la economía: la política fiscal, la cambiaria, y la de control de precios en los bienes y servicios. Todos los presupuestos fiscales y de las empresas del Estado, entre ellas, PDVSA, han sido aprobados por la Asamblea sin exigir rendición de cuenta sobre la eficiencia del gasto ejecutado, el cumplimiento de metas, y los efectos del mismo sobre la inflación y el endeudamiento público, entre otros aspectos. El resultado ha sido un desorden e indisciplina fiscal, con una ejecución de gasto sin transparencia que ha incentivado la corrupción como lo demuestra el caso de los más de 130 millones de kilogramos de alimentos podridos importados por PDVAL.

Cabe resaltar, que la Asamblea derogó en el 2005, precisamente cuando los precios del petróleo mostraban una fuerte tendencia alcista, la Ley que creó el Fondo de Estabilización macroeconómica que obligaba al gobierno a ahorrar parte de los ingresos petroleros para ser utilizados como mecanismo de estabilización del gasto en momentos en que estos cayeran. Contrariamente a lo que han hecho otros países como Chile y Perú, que tienen reglas que imponen límites a la gestión fiscal, la Asamblea, complaciente con el gobierno, no sólo eliminó el FEM sino que creó un fondo de gastos paralelo (Fonden) para lo cual modificó la Ley del BCV con el objeto de transferirle a este fondo parte de las reservas internacionales.

Estas decisiones estimularon la voracidad de gasto del gobierno, echaron leña al fuego de la inflación, y es una de las causas por las cuales en 2009 al caer el precio del petróleo el gobierno no pudo ni ha podido utilizar la política fiscal como mecanismo para reactivar la economía, lo que si han podido hacer otros países en América Latina. Así mismo, la caída en las reservas internacionales con las severas consecuencias que tiene en la actividad económica, dada las restricciones que está imponiendo para la importación de bienes y servicios, también está vinculada con las mencionadas reformas a la Ley del BCV.

En cuanto a la política cambiaria, la Asamblea ha apoyado desde el 2003 el control de cambio y la posterior maxidevaluación, pese a que el mismo ha sido ineficaz para reducir la inflación; propició fuga de divisas e importaciones masivas debilitando a las pocas empresas que exportan en Venezuela. Y el fracaso del control de precios queda evidenciado con la galopante inflación.

Para rematar la cadena de disparates económicos, la Asamblea ha estado creando el marco jurídico que sirve de soporte al proceso de aniquilamiento progresivo de la propiedad privada sobre los medios de producción, hipertrofiando y haciendo más ineficiente al Estado, y más vulnerable la economía.

Por todo lo anterior, urge una nueva Asamblea para superar la crisis. Comprometida con el respeto a la Constitución; que valore la importancia de una economía estable y próspera; y que vele por una gestión pública eficiente y honesta. El 26S es la oportunidad.